47-A-23

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las diez horas con dieciocho minutos del día nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Mediante resolución de f. 5, se requirió información al Comandante de Servicio de Guardacostas de la Marina Nacional de El Salvador, en el marco de la investigación preliminar, respecto de los hechos objeto de investigación. En ese contexto, se recibió en esta sede el informe y documentación anexa remitidos por dicho servidor público (ff. 7 al 58).

Antes de emitir el pronunciamiento respectivo, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. En el caso particular, el informante anónimo señaló que el día domingo doce de marzo de dos mil veintitrés, los vehículos pick up placas N11661 y N18433, propiedad de la Autoridad Marítima Portuaria –AMP–, habrían sido utilizados para transportar turistas al Aeropuerto Internacional de El Salvador y al Restaurante Asados del Campo, ubicado en San Miguel.

II. Ahora bien, con la información obtenida durante la investigación preliminar, se ha determinado que:

i) Consta en la página web de la Asamblea Legislativa que, mediante Decreto Legislativo No. 691 del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial No. 89, Tomo 439 del diecisiete de mayo del corriente año, se emitió la Ley de Navegación, la cual establece en el artículo 224 que se declara “en proceso de disolución la entidad de derecho público, denominada Autoridad Marítima Portuaria, [siendo] La Marina Nacional, a través del Ministerio de la Defensa Nacional [la que], sucede a partir de la vigencia de esta ley en las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones que corresponden a la Autoridad Marítima Portuaria; por tanto, en todas las leyes, decretos, convenios, contratos y otros instrumentos y documentos, en los que se haga referencia a la Autoridad Marítima Portuaria, se entenderá que se refiere a la Marina Nacional”.

ii) Los vehículos *pickup* placas N11-661 y N18-433 fueron recibidos por la Marina Nacional de El Salvador a la ex AMP el día veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, después de haber pasado los ocho días hábiles de la publicación de la Ley de Navegación en el Diario Oficial, como consta en el informe suscrito por el Comandante de Servicio de Guardacostas de la Marina Nacional de El Salvador (ff. 7 y 8) y las copias de tarjetas de circulación (ff. 9 y 10).

iii) La finalidad del uso de dichos vehículos es cumplir con las misiones institucionales, asimismo con las tareas como Autoridad Marítima asignadas por El Escalón Superior en la Capitanía de Puerto de La Unión y las Oficinas Centrales del Servicio de Guardacostas (f. 7).

82000000

iv) Desde el mes de marzo hasta el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el vehículo placas N11-661 estuvo asignado al señor _____, quien era el delegado local del Departamento de La Unión de la ex Autoridad Marítima Portuaria. Desde esa última fecha, se encuentra asignado al Teniente de Navío _____, Comandante y Capitán de Puerto de La Unión (f. 7).

v) El vehículo placas N18-433 estuvo asignado desde el mes de marzo hasta el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés al señor _____, Gerente del Departamento Marítimo de la ex Autoridad Marítima Portuaria. Desde esa última fecha, se encuentra asignado a la Sección de logística del Departamento de Administración de las diferentes comisiones oficiales del Servicio de Guardacostas (f. 7).

vi) Según el aludido informe, no se encontró ningún documento que determinara los horarios autorizados por la entonces Autoridad Marítima Portuaria para la circulación de los vehículos; mientras que la Marina Nacional de El Salvador, tiene autorizado la circulación de los mismos para las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana, para realizar las diferentes misiones asignadas al servicio de la Nación (f. 7).

vii) De acuerdo a la bitácora de transporte del día doce de marzo de dos mil veintitrés, en el vehículo placas N18-433 se realizó comisión oficial a las cinco horas desde las Oficinas Centrales de la AMP hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador, posteriormente hacia Santa Rosa de Lima, llegando a las dieciséis horas con un minuto; para que nueve minutos después, salieran con dirección a las oficinas centrales de la AMP, donde llegaron a las diecinueve horas con cincuenta minutos (ff. 7, 36).

viii) Según la bitácora de transporte y solicitud de transporte y misión oficial correspondientes al día doce de marzo de dos mil veintitrés, en el vehículo placas N11-661 se realizó comisión oficial para trasladar delegación de médicos; la cual se llevó a cabo desde las tres horas, partiendo de las oficinas de la Delegación Local de La Unión hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador y posteriormente hacia Santa Rosa de Lima; llegando a las diecisiete horas nuevamente a la Delegación de La Unión. El encargado de la comisión era el señor _____ y quien autorizó dicha salida fue el Ingeniero _____ (ff. 11, 15).

ix) No se encontró ningún reporte o señalamiento contra las personas de la ex Autoridad Marítima Portuaria que han tenido a cargo dichos vehículos (f. 8).

III. A tenor de lo dispuesto en los artículos 33 inciso 4° de la Ley de Ética Gubernamental, en lo sucesivo LEG; 83 inciso final y 84 inciso 1° de su Reglamento, recibido el informe correspondiente, el Tribunal resolverá si continúa el procedimiento o si archiva las diligencias.

En ese sentido, una vez agotada la investigación preliminar el Tribunal debe decidir si a partir de los elementos obtenidos se determina la existencia de una posible infracción ética

y si, por ende, decreta la apertura del procedimiento; pues de no ser así, el trámite debe finalizarse.

IV. La información obtenida en el caso de mérito desvirtúa los hechos señalados por el informante anónimo, pues consta que los vehículos institucionales *pickup* placas N11-661 y N18-433, antes propiedad de la AMP y actualmente de la Marina Nacional de El Salvador, **fueron utilizados el día doce de marzo de dos mil veintitrés, para el cumplimiento de “comisiones oficiales”**, consistentes en trasladarse desde las Oficinas Centrales de la AMP hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador y posteriormente hacia Santa Rosa de Lima; así como desde la Delegación Local de La Unión hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador y posteriormente hacia Santa Rosa de Lima, respectivamente.

Asimismo, el Comandante de Servicio de Guardacostas de la Marina Nacional de El Salvador fue determinante en señalar en su informe que no se encontraron reportes o señalamientos en contra de las personas que tuvieron a su cargo dichos vehículos (f. 8).

Consecuentemente, se han desvanecido los elementos planteados en el aviso, referentes a que dichos automotores hayan sido utilizados para transportar turistas, como fue señalado por el informante.

Y es que, a pesar de la trascendencia mediática del caso, en atención a las condiciones y al lugar en que fueron fotografiados los automotores, la autoridad requerida ha informado y justificado el uso de los mismos en la fecha cuestionada; tal como ha sido resuelto por este Tribunal en casos similares (*v. gr.* pronunciamiento del trece de agosto de dos mil veintiuno en el procedimiento con referencia 18-D-21).

Por consiguiente, no se advierten los elementos necesarios para considerar la posible transgresión al deber ético de: *“Utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados”*, regulado en el art. 5 letra a) de la LEG.

V. Con lo antes expuesto, es preciso referir que el deber ético regulado en el art. 5 letra a) de la LEG, en relación con el catálogo de principios rectores que comprende dicho cuerpo normativo –entre ellos los de supremacía del interés público, eficiencia y eficacia–, exhortan a todos aquellos que administran recursos del Estado a utilizarlos de forma *racional*, y destinarlos únicamente para fines institucionales; pues su desvío hacia objetivos particulares indudablemente se traduce en actos que transgreden la ética pública.

Debiendo recordarse, además, que el cumplimiento de una misión de carácter oficial –sin perjuicio que sea desarrollada en días inhábiles–, debe de realizarse con especial atención a los principios de *Responsabilidad* (cumplir con diligencia las obligaciones del cargo o empleo público) y *Lealtad* (actuar con fidelidad a los fines del Estado y a los de la institución en que se desempeña); procurando cuidar la imagen institucional y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en la gestión de las autoridades administrativas, especialmente

03000000

al utilizar bienes identificados con distintivos que permitan relacionarlos a la administración pública.

Por tanto, con base en lo dispuesto en los artículos 33 inciso 4° de la Ley de Ética Gubernamental, 83 inciso final y 84 inciso 1° de su Reglamento, este Tribunal **RESUELVE:**

Sin lugar la apertura del procedimiento, por las valoraciones expuestas en el considerando IV de esta resolución; en consecuencia, *archívese* el presente expediente.

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN

5

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme al criterio de la 21-20-RA-SCA del 16/11/2020 y lo establecido en el artículo 30 de la LAIP, se extiende la versión pública: